

## RESOLUCIÓN No. 00933

### “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades delegadas por la Resolución No. 1037 del 28 de julio de 2016 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 del 4 de mayo de 2009, en cumplimiento de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, la Ley 1333 de 21 de julio 2009, Decreto 948 de 5 de junio de 1995 compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre de 1974, Resolución 627 de 7 de abril de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Decreto 01 de 1984, y

#### CONSIDERANDO

##### ANTECEDENTES

Que la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, mediante Auto No. 00163 del 25 de abril de 2012, inició procedimiento sancionatorio administrativo de carácter ambiental en contra de la Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.169.827, en calidad de propietaria del establecimiento denominado **TIENDA AGUILA DEL RESTREPO**, registrado con matrícula mercantil No. 1289819 del 15 de julio de 2003, ubicado en la carrera 17 No. 17 – 47 sur, de la localidad de Antonio Nariño de esta ciudad, en los términos del artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, acto administrativo notificado personalmente el día 10 de mayo de 2012.

Que a través del Auto No. 00312 del 28 de febrero de 2013, se formuló a la Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.169.827**, en calidad de propietaria del establecimiento denominado **TIENDA AGUILA DEL RESTREPO**, registrado con matrícula mercantil No. 1289819 del 15 de julio de 2003, ubicado en la carrera 17 No. 17 – 47 sur, de la Localidad de Antonio Nariño de esta ciudad, a título de dolo el siguiente cargo:

“(…)

**Cargo Primero:** *Superar presuntamente los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en una Zona Comercial en un horario nocturno, mediante el uso un (1) Computador y Dos 2) Parlantes, contraviniendo lo normado en la Tabla No. 1 del Artículo Noveno de la Resolución 0627 de 2006 en concordancia con el Artículo 45 del Decreto 948 de 1995.*

## RESOLUCIÓN No. 00933

(...)"

El citado acto administrativo, fue notificado en cumplimiento del Artículo 19 de la ley 1333 de 2009, por aviso el día 24 de junio de 2013, quedando debidamente ejecutoriado el día 25 de junio de 2013.

Que la Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.169.827, no presentó descargos ni solicitud de pruebas en contra del Auto No. 00312 del 28 de febrero de 2013.

Que mediante el Auto No. 00132 del 17 de enero de 2015, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, abrió a pruebas el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta entidad mediante el Auto No. 00163 del 25 de abril de 2012, expedido por Dirección de Control Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA).

Dentro del precitado auto se decretaron como pruebas todos los documentos que reposan en el expediente SDA-08-2012-182, correspondiente al establecimiento de comercio, denominado para la época de los hechos, **TIENDA AGUILA DEL RESTREPO**, que sean pertinentes, necesarias y conducentes al esclarecimiento de los hechos.

Mediante radicado 2015EE20987 del 09 de febrero de 2015, esta Entidad, comunico a la Sra. **YOLANDA VARGAS CIFUENTES**, identificado con cédula No. 52.169.827, que esta secretaría se encontraba adelantando la diligencia de notificación personal para el Auto No.00132 de 2015, y que para tal fin debería acercarse a la dirección Av. Caracas No. 54 – 38, ventanilla de atención al usuario – notificaciones, en el horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm, jornada continua para efectos de notificarse del acto administrativo de la referencia, dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del envío de la presente comunicación, atendiendo lo establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984.

También se comunicaba que, en caso de no comparecer dentro del término previsto, la Entidad procedería de conformidad con la normatividad vigente.

Una vez agotado el tiempo para realizar la notificación personal, y de acuerdo al artículo 45 del Código contencioso administrativo, el cual expone:

(...)

*ARTÍCULO 45. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutive de la providencia.*

(...)

## RESOLUCIÓN No. 00933

El anterior acto administrativo fue notificado mediante edicto, fijado el día 10 de junio de 2015 a las 8:00 AM y desfijado el día 24 de junio del mismo año a las 17:00 p.m., quedando ejecutoriada el día 25 de junio de 2013.

### CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto otorga a los entes públicos responsables del control ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro Estado social de derecho.

De la misma forma, existen en nuestro ordenamiento unas normas reguladoras ambientales que conducen a la aplicación de medidas preventivas y sancionatorias, por el incumplimiento a las regulaciones establecidas sobre la protección del ambiente y el manejo de los recursos naturales renovables en nuestro país.

Que de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que la Constitución Nacional contiene derechos y deberes de los ciudadanos frente a la sostenibilidad de un ambiente sano, en el artículo 79 encontramos que *“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”* y en el artículo 80 ordena al Estado que *“...deberá prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir reparación de los daños causados”*. Es por esto que las autoridades ambientales están en la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano a los ciudadanos, y hacer cumplir las disposiciones con el fin de que esto no sea vulnerado.

A su vez, el artículo 80 de la Constitución Política, preceptúa que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, en el inciso 2° del mencionado artículo, se refiere a los instrumentos represivos y establece la obligación por parte del estado para *“imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”*.

Que igualmente, el ordenamiento constitucional señala en su artículo 95, que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral octavo el de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Consecuentes con la política pública de protección del ambiente y el contenido y alcance de las regulaciones existentes en materia de protección ambiental y manejo de los

Página 3 de 25

### RESOLUCIÓN No. 00933

recursos naturales en nuestro país, es imprescindible actuar dentro del marco de las finalidades de la función administrativa de la autoridad ambiental, a efectos de propender por el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, para velar porque se asegure el establecimiento y la operación de controles adecuados y eficaces respecto a los factores de deterioro ambiental, teniendo de presente que el desarrollo económico no se convierta en una amenaza a la preservación de los recursos naturales renovables.

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Que el párrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: *“en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”*.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.

Que, a su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que el artículo 25 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 otorgó la oportunidad al presunto infractor para que, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, presentara descargos por escrito y aportara o solicitara la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.

Que la presunta infractora, Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.169.827, no presentó escrito de descargos ni solicitudes probatorias frente al Auto de formulación de pliego de cargos No. 00312 de 28 de febrero de 2013, dentro del término legal.

Que descendiendo al caso *sub examine*, es importante señalar que esta autoridad ambiental ejerce las funciones de control y vigilancia de los recursos naturales en el

### **RESOLUCIÓN No. 00933**

Distrito Capital, por lo que esta investida con las facultades necesarias para hacer respetar la normativa ambiental dentro de su jurisdicción. Así pues, puede realizar visitas técnicas y adelantar procedimientos sancionatorios administrativos de carácter ambiental en caso de encontrar vulneraciones a las normas positivas ambientales.

Tratándose de las infracciones ambientales en materia de contaminación auditiva, es decir, ruido, se tratan de conductas de ejecución instantánea, por lo que una vez se confirma con la medición que se sobrepasaron los límites máximos permisibles de emisión de ruido para el sector y el horario, la vulneración al recurso se consumó.

Por lo tanto, las mediciones efectuadas el día de la visita técnica de seguimiento (21 de Julio de 2011) que sirvieron de sustento para proferir el Concepto Técnico No. 05101 del 30 de Julio de 2011, generan una condición única para determinar si existe o no infracción ambiental.

Es importante resaltar, que las condiciones encontradas en el momento de la visita técnica, prueban un incumplimiento a la normativa ambiental en materia de ruido, independientemente de las acciones que, con ocasión del funcionamiento del establecimiento de comercio, se lleven a cabo para la mitigación del impacto sonoro dentro del sector. Sin embargo, no existe prueba alguna de que el propietario del establecimiento haya implementado medidas de mitigación y/o control de emisión de ruido proveniente de su actividad comercial.

Así mismo, dentro de las normas de rango constitucional, en el artículo 7° nació la obligación del Estado y de los particulares de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Igualmente, en el artículo 79 de la Constitución Política elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los Ciudadanos a gozar de un ambiente sano. El medio ambiente es un derecho colectivo que debe ser protegido por el Estado, estableciendo todos los mecanismos necesarios para su protección.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber de las personas, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Así mismo, dentro de la Ley 99 de 1993, se estableció en el artículo 107 que las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

Sea esta la oportunidad para aclararle al administrado que el procedimiento sancionatorio ambiental que nos convoca, se inició y continuó por el incumplimiento a los niveles de

### RESOLUCIÓN No. 00933

ruido establecidos en la Resolución 627 de 2009 y Decreto 948 de 1995, hoy compilado en el decreto 1076 de 2015.

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C- 595 de 2010, al analizar la exequibilidad del párrafo del artículo 1° y el párrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, estableció:

*“Los párrafos demandados no establecen una “presunción de responsabilidad” sino de “culpa” o “dolo” del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333).*

*No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales.*

*La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar su demostración.”*

Que teniendo en cuenta el análisis anterior considera esta autoridad ambiental que, en el presente caso, el cargo primero formulado en contra de la Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES**, consistente en haber superado los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en una zona comercial en horario nocturno, mediante el uso de un (1) computador y dos (2) parlantes, contraviniendo de esta manera lo establecido por la tabla No.1 del Artículo noveno de la Resolución 0627 de 2006, lo anterior, en concordancia con el Artículo 45 del Decreto 948 de 1995, está llamado a prosperar.

Que, así las cosas, en el expediente obran suficientes pruebas documentales y técnicas que dan cuenta de la responsabilidad de la Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.169.827, en calidad de propietaria del establecimiento comercial denominado para la época de los hechos, TIENDA AGUILA DEL RESTREPO, ubicada en la CR 17 No.17-47 Sur (dirección antigua), CR 17 No. 17-67 Sur (dirección nueva), de la localidad de Antonio Nariño de la Ciudad de Bogotá D.C, respecto del incumplimiento de las normas en materia de ruido, en específico el artículo 45 del Decreto 948 de 1995, pruebas que valga decir, habida cuenta que en ningún estado procesal fueron tachadas de falsas, luego al presumirse su legalidad, comportan

### RESOLUCIÓN No. 00933

documentos idóneos que acreditan el compromiso del investigado, en las infracciones cometidas.

Que, con relación a la prueba documental, el tratadista Carlos Betancur Jaramillo en su obra Derecho Procesal Administrativo resalta lo siguiente:

(...)

*“...Es de trascendental importancia dentro del proceso, por ser la forma documentada la que predomina en la esfera administrativa. En ésta se desenvuelve una actividad que genera, como dice Bielsa, una documentación propia, ya que ella es casi siempre formal, escrita o actuada. Esta documentación esta insita en toda la actividad administrativa. De allí que no se refiera sólo a los actos administrativos ni a los distintos pasos previos que deberán cumplirse para su expedición, sino también a todas las gestiones que cumple la administración en el ejercicio de su actividad. Así, tienen forma escrita, por regla general, los oficios, los conceptos, los requerimientos, las puestas en mora, las instrucciones de servicio, las circulares, los informes técnicos, etc....”*

Que sumado a lo anterior, tal y como lo señala la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias, la exposición a las emisiones atmosféricas y la actividad comercial de las empresas debe enmarcarse en los rangos que determine la ley, al punto que se proteja la salud y el medio ambiente. Veamos:

*“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realiza su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. (subrayado fuera del texto)*

*El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.*

*Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos al ambiente.*

### **RESOLUCIÓN No. 00933**

*La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad.*

*No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar.” (Sentencia C-254 de 1.993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).”*

Que, en este orden de ideas, queda claro que la Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.169.827, en calidad de propietaria del establecimiento comercial denominado para la época de los hechos, **TIENDA AGUILA DEL RESTREPO**, ubicada en la CR 17 No.17-47 Sur (dirección antigua), CR 17 No. 17-67 Sur (dirección nueva), de la localidad de Antonio Nariño de la Ciudad de Bogotá D.C., infringió los derechos colectivos de los ciudadanos y la normativa ambiental vigente, de acuerdo con el incumplimiento del artículo 45 del Decreto 948 de 1995.

Respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, según el cual la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero “...dentro de los límites del bien común...”.

Que adicionalmente la Corte Constitucional en Sentencia, T- 536 del 23 de septiembre de 1992, determinó:

*“...Para esta Corte, entonces, no cabe duda que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia...”*

Se considera pertinente en este momento hacer referencia a algunos criterios adicionales de la Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:

### **RESOLUCIÓN No. 00933**

*“La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.*

*“Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).”*

Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero señala:

*“El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo.”*

De acuerdo a esta interpretación que hace la Corte Constitucional, todas las personas son responsables del cuidado y conservación de los recursos naturales, tomando conciencia que no se debe agotar o menoscabar la base en que se sustentan, evitando el deterioro del medio ambiente, teniendo en cuenta que no solo es un derecho disfrutar del ambiente sano consagrado en la Constitución Nacional, sino que también es un deber de todos protegerlo y propender por la calidad de vida y bienestar social de las futuras generaciones para la satisfacción de sus propias necesidades, principio por el cual se da cumplimiento al concepto de desarrollo sostenible, consagrado en la Ley 99 de 1993. Así mismo hace parte de este precepto, el cumplimiento de las obligaciones y deberes con relación a las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental con respecto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

En conclusión, es obligación de esta Secretaría Distrital de Ambiente por mandato superior, en ejercicio de la gestión asignada, mediante el cumplimiento de las funciones fijadas legalmente y en el ámbito de su competencia hacer efectivos los mandatos constitucionales y legales dentro del marco del estado de derecho y el desarrollo sostenible.

## RESOLUCIÓN No. 00933

### ANÁLISIS PROBATORIO

De acuerdo al cargo primero formulado mediante Auto No. 00312 de 28 de febrero de 2013, se realiza el siguiente análisis:

**Cargo Primero:** *Superar presuntamente los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en una Zona Comercial en un horario nocturno, mediante el uso un (1) Computador y Dos 2) Parlantes, contraviniendo lo normado en la Tabla No. 1 del Artículo Noveno de la Resolución 0627 de 2006 en concordancia con el Artículo 45 del Decreto 948 de 1995.*

De acuerdo a la visita técnica de seguimiento realizada el día 21 de Julio de 2011, se emitió el Concepto Técnico No. 5101 de 30 de julio de 2011, en el cual se concluyó que el generador de la emisión de ruido, continuaba incumpliendo con los niveles máximos permisibles de emisión de ruido aceptados por la normatividad ambiental vigente, para una zona comercial, en el periodo nocturno, al registrar un valor de 81,0 dB(A), siendo el máximo permisible 60 dB (A).

De igual manera, las correcciones efectuadas al momento de la medición y los equipos utilizados para la misma (sonómetro y pistófono) calibrados de manera correcta, permiten inferir razonablemente que los valores arrojados son precisos.

En conclusión, el hecho, por el cual, se formuló el cargo de haber superado los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en una zona comercial en horario nocturno, mediante el uso de un (1) computador y dos (2) parlantes, contraviniendo de esta manera lo establecido por la tabla No.1 del Artículo noveno de la Resolución 0627 de 2006, lo anterior, en concordancia, con el Artículo 45 del Decreto 948 de 1995, se encuentra debidamente probado.

Una vez analizado el material probatorio, se considera que la Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.169.827, en calidad de propietaria del establecimiento comercial denominado para la época de los hechos, **TIENDA AGUILA DEL RESTREPO**, ubicada en la CR 17 No.17-47 Sur (dirección antigua), CR 17 No. 17-67 Sur (dirección nueva), de la localidad de Antonio Nariño de la Ciudad de Bogotá D.C., infringió los derechos colectivos de los ciudadanos y la normativa ambiental vigente, de acuerdo con el incumplimiento del artículo 45 del Decreto 948 de 1995, razón por la cual esta Secretaría procederá a declarar responsable ambientalmente a la persona natural en mención, del cargo primero a título de dolo formulado mediante el Auto No. 00312 de 28 de febrero de 2013 y procederá a imponer una sanción, como a continuación se describe.

## RESOLUCIÓN No. 00933 DE LA SANCIÓN A IMPONER

Que en consideración a los preceptos Constitucionales y Legales esta Secretaría ha dado cabal cumplimiento al debido proceso dentro del proceso sancionatorio iniciado y las decisiones tomadas tienen su fundamento legal, habiéndose cumplido los procedimientos legales instaurados en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009 y en las demás normas aplicables al caso, preservando las garantías que protegen, en este caso, al propietario del establecimiento en comento, pero al no poder ésta desvirtuar los cargos formulados, la autoridad ambiental, en este caso, la Secretaría Distrital de Ambiente, está en la obligación de imponer la sanción respectiva.

Que la normatividad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de la misma acarreará la imposición de las sanciones legales vigentes. Así mismo, los actos administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo de esa normativa, deben ser observados en su integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la imposición de las respectivas sanciones legales.

Que esta Entidad es competente para imponer las sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 1993 según la gravedad de las infracciones debidamente comprobadas.

Que la precitada disposición, señala el tipo de sanciones a imponer al infractor de normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables. Igualmente, precisa en su párrafo primero, que la imposición de multas no exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas ordenadas por la autoridad ambiental responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados, ni del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

**“ARTICULO 40.- Sanciones.** *Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (...) impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:*

1. *Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

*(...)*

Que el párrafo 2° del artículo 40 de la ley 1333 del 21 de Julio de 2009 determinó que el Gobierno Nacional definiría mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes donde se

Página 11 de 25

## RESOLUCIÓN No. 00933

tendría en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor.

Que con fundamento en lo dispuesto anteriormente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Decreto 3678 de 4 de octubre de 2010 por medio del cual se fijaron los criterios para la imposición de sanciones ambientales, indicando en su artículo tercero que: *“Todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento.*

*Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción.”*

Una vez agotado el trámite procesal dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y advertida la procedencia de sanción respecto de la Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.169.827, en calidad de propietaria del establecimiento comercial denominado para la época de los hechos, **TIENDA AGUILA DEL RESTREPO**, ubicada en la CR 17 No.17-47 Sur (dirección antigua), CR 17 No. 17-67 Sur (dirección nueva), de la localidad de Antonio Nariño de la Ciudad de Bogotá D.C., la Dirección de Control Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente emitió el Concepto Técnico No. 01382 del 03 de Abril de 2017, que desarrolló los criterios para la imposición de la **sanción principal de MULTA**, acorde con los criterios establecidos en el artículo 4° del Decreto 3678 de 2010, el cual dispone:

*“Artículo 4°.- Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5° de la [Ley 1333 de 2009](#), y con base en los siguientes criterios:*

*B: Beneficio ilícito*

*α: Factor de temporalidad*

*i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo*

*A: Circunstancias agravantes y atenuantes*

*Ca: Costos asociados*

*Cs: Capacidad socioeconómica del infractor (...)*”

En cumplimiento de la prenotada normativa, a través del Concepto Técnico mencionado anteriormente, se desarrollaron cualitativa y cuantitativamente los criterios expuestos, de conformidad con la metodología para la tasación de multas prevista en el artículo 4° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010 el cual prevén su artículo 4.- Multas.

### **RESOLUCIÓN No. 00933**

En el cual, para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo 4º de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente modelación matemática:

$$\text{Multa} = B + [(\&i)*(1+A)+Ca]*Cs$$

A continuación, se dará aplicación a la modelación matemática prevista en el artículo 4º de la Resolución MAVDT 2086 de 2010, de cara a los criterios para la imposición de la sanción principal de MULTA desarrollados para el presente caso respecto de la Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES identificada con cédula de ciudadanía No. 52.169.827**, en el Concepto Técnico No. 01382 del 3 de abril de 2017, así:

“(…)

#### **1. OBJETIVO**

*Formular y aplicar el instrumento de tasación de multa a la señora YOLANDA CIFUENTES VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No 52.169.827 propietaria del establecimiento comercial TIENDA ÁGUILA DEL RESTREPO, por incumplimientos a la normatividad ambiental en materia de ruido.*

(…)

#### **3. TASACIÓN DE LA MULTA**

*Una vez realizada la evaluación jurídica y agotada la etapa probatoria dentro del presente proceso sancionatorio en contra de la señora Yolanda Cifuentes Vargas identificada con cédula de ciudadanía No 52.169.827, esta Secretaría determinó que la sanción a imponer es la multa. Motivo por el cual se procederá con la elaboración del informe de criterios para establecer el valor de la sanción de acuerdo al siguiente cargo:*

*Cargo Primero: Superar presuntamente los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en una Zona Comercial en un horario nocturno, mediante el uso un (1) Computador y Dos (2) Parlantes, contraviniendo lo normado en la Tabla No. 1 del Artículo Noveno de la Resolución 0627 de 2006 en concordancia con el Artículo 45 del Decreto 948 de 1995.*

##### **3.1 Desarrollo de los criterios y variables para determinar el monto de la multa**

*Metodología: Conforme a lo establecido en el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones.) y la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y el Manual Conceptual y Procedimental – Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normatividad Ambiental - MAVDT, se desarrolla a*

### RESOLUCIÓN No. 00933

continuación el cálculo para cada una de las variables previstas en la modelación matemática definida en el artículo 4 de esta misma resolución y para el cargo primero formulado mediante el Auto No. 00312 del 28 de febrero de 2013.

*Modelo matemático*

$$\text{Multa} = B + [(\alpha \cdot R) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

*Dónde:*

*B: Beneficio ilícito*

*$\alpha$ : Factor de temporalidad*

*i: Grado de afectación ambiental*

*R: evaluación del riesgo*

*A: Circunstancias agravantes y atenuantes*

*Ca: Costos asociados*

*Cs: Capacidad socioeconómica del infractor.*

#### **3.1.1 Beneficio Ilícito**

*El valor del beneficio ilícito es la cuantía mínima que debe tomar una multa para cumplir su función disuasiva, y se refiere a la ganancia económica que obtiene el infractor fruto de su conducta:*

$$B = (Y * (1 - p)) / p$$

$$Y = y1 + y2 + y3$$

*Dónde:*

*Y: ingreso o percepción económica (costo evitado)*

*B: beneficio ilícito que debe cobrarse vía multa*

*p: capacidad de detección de la conducta*

*Ingresos directos de la actividad (Y1): Este tipo de ingresos se mide con base en los ingresos reales del infractor por la realización del hecho.*

*Teniendo en cuenta que no se evidencian ingresos directos producto de la infracción esta variable se considera en cero.*

**y1: 0**

*Costos evitados (Y2): Esta variable cuantifica el ahorro económico por parte del agente al incumplir las normas ambientales y/o los actos administrativos. Es decir, la ganancia que se obtiene al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación ambiental o potencial.*

### RESOLUCIÓN No. 00933

Teniendo en cuenta que no es posible para esta secretaria establecer con exactitud el costo que se evitó en cuanto a realizar las adecuaciones de las instalaciones para dar cumplimiento a la norma por lo tanto se considera esta variable en cero. Y el provecho económico se tendrá en cuenta como agravante.

**y2: 0**

*Ahorros de retraso (Y3): En los costos de retraso se ha de establecer que se cumplieron la norma ambiental y las actividades e inversiones que de ésta dependían, pero se realizaron con posterioridad a lo exigido legamente. Por tanto, el infractor realiza la inversión requerida pero su utilidad radica en el retraso.*

No se establece ningún tipo de ahorro de retraso por parte del infractor, por lo tanto, esta variable se considera en cero.

**Y3: 0.**

De lo anterior se tiene que para el ingreso o percepción económica (costo evitado) Y

$$Y = y1 + y2 + y3$$

**Y = 0**

#### 3.1.2 Capacidad de la detección de conducta.

Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores:

Capacidad de detección baja:  $p=0.40$

Capacidad de detección media:  $p=0.45$

Capacidad de detección alta:  $p=0.50$

Para este caso se determinó una capacidad de detección baja, debido a que el usuario **Yolanda Cifuentes Vargas** propietaria del establecimiento comercial **Tienda Águila del Restrepo**, teniendo en cuenta a la cantidad de establecimientos del distrito capital que son objeto de actividades de evaluación, seguimiento y control ambiental por parte de la entidad, como también que la visita técnica se realizó en respuesta a una queja interpuesta por la comunidad, razón por la cual se establece una capacidad de detección baja

**p = 0,4**

Calculando el beneficio ilícito de acuerdo a las variables se tiene

$$B = \frac{0 * (1 - 0,4)}{0,4}$$

**B = \$ 0**

## RESOLUCIÓN No. 00933

### 3.1.3 Factor de Temporalidad

*Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo.*

*Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 4 una acción sucesiva de 365 días o más.*

*La variable alfa ( $\alpha$ ) se calcula aplicando la siguiente relación:*

$$\alpha = 3/364 * d + (1 - 3/364)$$

*Dónde:*

*d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).*

*Dónde:*

*$\alpha$ : factor de temporalidad*

*Teniendo en cuenta que la infracción fue detectada en las visitas técnicas de los días 22/01/2011 evaluado en el concepto técnico 1288 del 21/02/2011, y 21/06/2011 evaluada en el concepto técnico 5101 del 30/07/2011, en donde se tomó la medición de ruido por emisión, esta infracción se presenta de manera discontinua en el tiempo.*

*Por lo anterior el número de días en los que se considera permaneció la infracción es 2*

$$\alpha = \frac{3}{364} * d + \left(1 - \frac{3}{364}\right)$$

$$\alpha = \frac{3}{364} \times 2 + \left[1 - \frac{3}{364}\right]$$

$$\alpha = 1,0082$$

### 3.1.4 Evaluación de riesgos

*Aquellas infracciones que no se concretan en impactos ambientales, generan un riesgo potencial de afectación. El nivel de riesgo que genera dicha acción se encuentra asociado a la probabilidad de ocurrencia de la afectación, así como a la magnitud del potencial efecto.*

*Para este caso, debido a que no se establece una afectación ambiental, aplica la evaluación del riesgo.*

## RESOLUCIÓN No. 00933

$$r = O * m$$

Donde

$r$  = riesgo

$O$  = probabilidad de ocurrencia de la afectación

$m$  = Magnitud potencial de la afectación

**Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o).** La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la Tabla

Tabla 1 Probabilidad de ocurrencia

Criterio	Valor de probabilidad de ocurrencia
Muy alta	1
Alta	0.8
Moderada	0.6
Baja	0.4
Muy Baja	0.2

**Magnitud Potencial de la afectación (m).** La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un “escenario con afectación”. Una vez obtenido el valor de (I) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:

Tabla 2 Magnitud Potencial de la afectación

Criterio de valoración de afectación	Importancia de la afectación	Magnitud potencial de afectación
Irrelevante	8	20
Leve	9 - 20	35
Moderado	21 - 40	50
Severo	41 - 60	65
Crítico	61 - 80	80

Para determinar la magnitud Potencial de la afectación (m), debemos determinar la importancia de la afectación (I).

Considerando como bien de protección el espacio público y como acción impactante el Ruido.

Tabla 3. Identificación de bienes de protección afectados

### RESOLUCIÓN No. 00933

SISTEMA	SUBSISTEMA	COMPONENTE
MEDIO SOCIOECONÓMICO	MEDIO SOCIOCULTURAL	Humanos y estéticos

A continuación, se procede a calcular la importancia de la afectación para el cargo:

- **Intensidad (In)**

Ponderación	Afectación del bien de protección
4	<p>Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección.</p> <p>Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 34% y 66%.</p> <p>Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el concepto técnico 1288 del 21/02/2011 donde se obtuvo un valor de Leq emisión de 84.4 dB(A) y que los niveles máximos de emisión de ruido establecidos por la Resolución No. 627/2006 del MAVDT, para una zona comercial en el periodo nocturno cuyo nivel máximo de emisión de ruido es de 60 dB(A) se obtiene una desviación del 40.1%, se considera la mínima ponderación 1.</p>

- **Extensión (Ex)**

Ponderación	Afectación del bien de protección
1	<p>Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno.</p> <p>Cuando la afectación puede determinarse en un área localizada e inferior a una (1) hectárea.</p> <p>Teniendo en cuenta que el área de influencia es menor de una hectárea, se considera la mínima ponderación 1</p>

- **Persistencia (Pe)**

Ponderación	Afectación del bien de protección
1	<p>Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción.</p> <p>Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses</p> <p>Considerando, el funcionamiento de dos cabinas, un bafle y un amplificador de sonido, de acuerdo con el resultado de las mediciones efectuadas el día 22/01/2011, se establece que para este caso el tema de ruido es de ejecución instantánea y no constante, por no ser un contaminante persistente, determinando que la duración de su efecto es inferior a seis (6) meses. Se considera esta ponderación en 1.</p>

## RESOLUCIÓN No. 00933

### - Reversibilidad (RV)

Ponderación	Afectación del bien de protección
1	<p>Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses</p> <p>Teniendo en cuenta, que el ruido generado por el funcionamiento de un mixer, 6 cabinas de sonido y un video proyector, de acuerdo con el resultado de las mediciones efectuadas el día 22/01/2011, es de ejecución instantánea y no constante, por no ser un contaminante persistente, se cataloga que la alteración puede ser asimilada por el entorno en un periodo inferior a un (1) año. Se considera esta ponderación en 1.</p>

### - Recuperabilidad (Mc)

Ponderación	Afectación del bien de protección
1	<p>Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental.</p> <p>Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor de 1 año</p> <p>La implementación de medidas que mitiguen la generación de algún tipo de perturbación por ruido o cesen definitiva o inmediatamente el impacto negativo ocasionado, debido al funcionamiento de un mixer, 6 cabinas de sonido y un video proyector, tales como la suspensión de las emisiones sonoras o la realización de obras de insonorización efectivas, permite que se catalogue el atributo en el mínimo de ponderación. Se considera esta ponderación en 1</p>

### Valoración de la Importancia de la afectación (I):

$$I = (3In) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc$$

$$I = (3*4) + (2*1) + 1 + 1 + 1$$

$$I = 17$$

Calificación = **Leve**

Para una importancia de afectación de **17** teniendo en cuenta los valores de la tabla numero 2 corresponde una magnitud Potencial de afectación de **35**.

**Probabilidad de ocurrencia (o)** Teniendo en cuenta que las visitas de vigilancia y control se realizaron por solicitud de la comunidad por lo que se presentó una conducta continua por lo tanto se considera una probabilidad de ocurrencia moderada teniendo en cuenta los valores de la tabla número 1, **Baja= 0.4**

## RESOLUCIÓN No. 00933

**(O) = 0,4**

*Riesgo: definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas:*

*Tenemos que para el cargo:*

$$r = 0,4 \times 35$$

**r = 14**

*Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la siguiente ecuación:*

$$R = (11.03 \times SMMLV) \times r$$

*Dónde:*

*R = Valor monetario de la importancia del riesgo*

*SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente (en pesos)*

*r = Riesgo*

$$R = (11,03 \times 737.717) \times 14$$

*R = \$ 113.918.259 Ciento trece millones novecientos dieciocho mil doscientos cincuenta y nueve pesos M/cte.*

### 3.1.5 Circunstancias agravantes y atenuantes

*Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.*

*Del análisis de los criterios para establecer las circunstancias agravantes, aplicados a la conducta para este cargo, de acuerdo a los valores establecidos en la Resolución 2086 de 2010 se tiene que la señora YOLANDA CIFUENTES VARGAS propietaria de el establecimiento TIENDA AGUILA DEL RESTREPO, una vez revisados los antecedentes del expediente SDA-08-2012-182 se puede determinar que el usuario cuenta con el siguiente agravante:*

<b>Agravantes</b>	<b>Valor</b>
<i>Obtener provecho económico para sí o para un tercero</i>	<b>0,2</b>
<b>TOTAL, Agravantes</b>	<b>0,2</b>

### RESOLUCIÓN No. 00933

*Obtener provecho económico para sí: Por retrasar la inversión para las obras de insonorización del establecimiento.*

*Por lo anterior el valor de la circunstancias agravantes y atenuantes es de*

**A: 0,2**

#### **3.1.6 Costos asociados**

*La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor.*

*Para este caso y teniendo en cuenta que la Autoridad Ambiental no incurrió en costos adicionales a los de seguimiento y control propios de la Entidad, no se configuran costos asociados.*

$Ca = 0$

#### **3.1.7 Capacidad socioeconómica del infractor**

*Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica del presunto Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010.*

*Realizada la consulta en el Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio, se encontró que la señora Yolanda Cifuentes Vargas identificada con C.C 52.169.827, propietario del establecimiento TIENDA ÁGUILA DEL RESTREPO, es una persona natural. Por lo anterior se procede a calcular la capacidad socioeconómica de acuerdo a la base de datos del Sistema de Identificación de Potenciales beneficiarios de Programas Sociales, conocido como SISBEN.*

*Una vez consultada la base de datos del SISBEN se encuentra que la señora Yolanda Cifuentes Vargas identificado con C.C 52.169.827, no está registrado, por lo anterior como lo propone la Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental actual (MADS), es el estrato socioeconómico que en el país varía de 1 a 6 y que de acuerdo con lo estipulado en el sistema de información con que cuenta la Secretaría Distrital de Planeación SINUPOT al predio ubicado en la KR 17 17 67 SUR que es donde se desarrolla la actividad y también donde se le han realizado las notificaciones se le asigna estrato 3.*

*Tabla 4. Equivalencias entre el nivel SISBEN y la capacidad socioeconómica del infractor*

<b>NIVEL SISBEN</b>	<b>CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA</b>
1	0,01
2	0,02
3	0,03
4	0,04
5	0,05

### RESOLUCIÓN No. 00933

6	0,06
<i>Poblaciones desplazadas, indígenas y desmovilizadas por ser población especial no poseen puntaje, ni nivel.</i>	0,01

Fuente: <http://www.sisben.gov.co>

Teniendo en cuenta la tabla anterior se considera la capacidad socioeconómica del infractor en 0.03

**Cs = 0.03**

#### 3.2 Multa

Definidas todas las variables y factores se proceden al cálculo de la multa:

$$\text{Multa} = B + [(\alpha * r) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

$$\text{Multa cargo primero} = \$0 + [(1,0082 \times \$ 113.918.259) * (1+0,2) + 0] \times 0.03$$

**Multa cargo primero = \$ 4.134.686 Cuatro millones ciento treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis Pesos M/cte**

#### 4. CONCLUSIONES

Se recomienda al grupo jurídico se analicen las observaciones de carácter técnico establecidas en el numeral 3. Para adoptar la decisión que corresponda dentro del proceso sancionatorio.

(...)

Que como consecuencia de encontrar responsable ambientalmente a la Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.169.827, en calidad de propietaria del establecimiento comercial denominado para la época de los hechos, **TIENDA AGUILA DEL RESTREPO**, ubicada en la CR 17 No.17-47 Sur (dirección antigua), CR 17 No. 17-67 Sur (dirección nueva), de la localidad de Antonio Nariño de la Ciudad de Bogotá D.C., respecto al cargo primero imputado, esta Secretaría encuentra procedente imponer como sanción principal una multa por valor de **\$ 4.134.686 Cuatro millones ciento treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis Pesos M/cte**

Que la sanción a imponer mediante la presente resolución no exonera a la Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES**, de cumplir con las acciones y obligaciones ordenadas por esta entidad, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

Que de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.

Página 22 de 25

### **RESOLUCIÓN No. 00933**

Que el artículo 5° del Decreto 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que el mismo artículo en el literal l) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.

Que de conformidad con lo contemplado en el numeral 2 del artículo primero de la Resolución 1037 del 28 de julio de 2016, el Secretario Distrital de Ambiente, delega en el Director de Control Ambiental, la función de expedir los actos administrativos que decidan de fondo los procesos sancionatorios.

Que, en mérito de lo expuesto,

### **RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Declarar responsable a la Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.169.827, en calidad de propietaria del establecimiento comercial denominado para la época de los hechos, **TIENDA AGUILA DEL RESTREPO**, ubicada en la CR 17 No.17-47 Sur (dirección antigua), CR 17 No. 17-67 Sur (dirección nueva), de la localidad de Antonio Nariño de la Ciudad de Bogotá D.C., del cargo primero imputado mediante Auto 00312 del 28 de Febrero de 2013, consistente en generar ruido que traspasó los límites de una propiedad en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, según se establece en el artículo 45 del Decreto 948 de 1995, en concordancia con lo establecido en la Tabla No.1 del Artículo noveno de la Resolución 0627 de 2006, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - Imponer a la Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.169.827, en calidad de propietaria del establecimiento comercial denominado para la época de los hechos, **TIENDA AGUILA DEL RESTREPO**, ubicada en la CR 17 No.17-47 Sur (dirección antigua), CR 17 No. 17-

### **RESOLUCIÓN No. 00933**

67 Sur (dirección nueva), de la localidad de Antonio Nariño de la Ciudad de Bogotá D.C., como sanción principal una multa por valor de \$ **4.134.686 (CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS) M/CTE**

**PARÁGRAFO PRIMERO:** la multa anteriormente fijada, se deberá cancelar en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, a órdenes de la Secretaría Distrital de Ambiente (Fondo de Financiación del Plan de Gestión Ambiental), Concepto M – 05-550 otros, en la Tesorería Distrital, ventanilla número 2, ubicada en el Supercade de la carrera 30 con calle 26 y previo diligenciamiento del formato para el recaudo de conceptos varios, disponible en la sede de la entidad, ubicada en la carrera 14 No. 54 -38. Una vez efectuado el pago se deberá a llegar a esta Secretaría, copia del recibo expedido con destino al expediente SDA-08-2012-1943.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** si el citado obligado al pago de la multa, no diera cumplimiento a lo ordenado, dicha multa presta merito ejecutivo y por tanto, se hará efectiva por medio del procedimiento de jurisdicción coactiva, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009

**ARTÍCULO TERCERO.** - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Señora **YOLANDA VARGAS CIFUENTES** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.169.827, o a su apoderado debidamente constituido, en la CR 17 No.17-47 Sur (dirección antigua), CR 17 No. 17-67 Sur (dirección nueva), de la localidad de Antonio Nariño de la Ciudad de Bogotá D.C.

**ARTÍCULO CUARTO.** - Comunicar la presente Resolución a la Subdirección Financiera de la Dirección de Gestión Corporativa de esta Secretaría para lo de su competencia.

**ARTÍCULO QUINTO.** - Comunicar al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el presente acto administrativo, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo señalado en el memorando 005 del 14 de marzo de 2013 emitido por el mismo ente de control enunciado y su instructivo.

**ARTÍCULO SEXTO.** - Publicar el contenido del presente acto administrativo en el boletín que para el efecto disponga esta Secretaría. Lo anterior en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** - Reportar la presente sanción una vez se encuentre ejecutoriada, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargado del RUIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley 1333 de 2009.

**ARTÍCULO OCTAVO.** - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer personalmente o por intermedio de apoderado,

**RESOLUCIÓN No. 00933**

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación y con el lleno de los requisitos legales conforme a lo dispuesto en los artículos los artículos 74, 76 y 77 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**  
**Dado en Bogotá a los 14 días del mes de mayo del 2017**



**OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA**  
**DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

*Expediente: SDA-08-2012-182 (1Tomo)*  
*Establecimiento: Tienda Águila del Restrepo*  
*Dirección del Establecimiento: Carrera 17 Sur No.17-47*  
*Concepto Técnico No. 01382 del 03/04/2017*  
*Proyectó: Santiago Nicolás Cruz Arenas*  
*Asunto: Sancionatorio*  
*Acto: RESUELVE UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES*  
*Localidad: Antonio Nariño*

**Elaboró:**

SANTIAGO NICOLAS CRUZ ARENAS	C.C:	1018429554	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 20170181 DE 2017	FECHA EJECUCION:	27/04/2017
------------------------------	------	------------	------	-----	------	---------------------------------	---------------------	------------

**Revisó:**

JAIRO MAURICIO BELTRAN BALLEEN	C.C:	79724443	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 20170292 DE 2017	FECHA EJECUCION:	08/05/2017
--------------------------------	------	----------	------	-----	------	---------------------------------	---------------------	------------

**Aprobó:**

**Firmó:**

OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA	C.C:	11189486	T.P:	N/A	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	14/05/2017
----------------------------	------	----------	------	-----	------	-------------	---------------------	------------